



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº **404** – 2016 – GRJ/GGR

Huancayo, **25 NOV 2016**

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTOS:

La Resolución Gerencial General Regional N° 002-2015-GRJ/GGR de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Junín, El Memorando N° 289-2015-GRJ-ORAF-ORH del Sub Director de Recursos Humanos, La Resolución Ejecutiva Regional N° 304-2016-GRJ/GR, del Gobernador Regional, y el Memorando N° 865-2016-GRJ/SG de la Secretaria General, y el Informe Legal n° 330-2015-GRJ/ORAJ del Director Regional de Asesoría Jurídica, y el Informe Técnico N° 45-2016-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, y los datos generales del proceso:

APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA	DIRECCION	RESOLUCION	DNI
CPCC. SALVATIERRA RODRIGUEZ, Luis Alberto	Director Regional de Administración de Finanzas	18/01/2011	31/12/2014	Jr. Los Rosales N° 281 - El Tambo	R.E.R. N° 123-2011-GR-JUNIN/PR	19990119

#### CONSIDERANDO:

#### DE LOS HECHOS:

Que, según se tiene de la Resolución Gerencial General Regional N° 002-2015-GRJ/GGR de fecha 14 de enero de 2015, emitida por el Gerente General Regional, los cargos imputados en contra del administrado Luis Alberto Salvatierra Rodríguez; consiste en que:

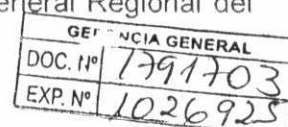
"(...) 7.- Que, de los 194 Renovaciones de Contratos Administrativos de la revisión de los 194 Renovaciones de Contratos Administrativos de Servicios – CAS, se evidencia que no ha cumplido con el requerimiento por el área usuaria del servicio, la que debió emitir un informe favorable a la Sub Gerencia de Personal, solicitando la renovación del contrato, por un plazo determinado, siempre y cuando no exceda el año fiscal; luego de ello la Sub Gerencia debería de consultar con el Área de planeamiento y la Gerencia de Administración, la disponibilidad económica y presupuestaría, luego de ellos se procede recién a la renovación de contrato, por escrito y se aprueba mediante Resolución Ejecutiva Regional o Resolución Gerencial, según sea el caso.

8.- Que, de igual modo de todas las renovaciones de contratos, también se aprecia que han sido efectuadas bajo el año fiscal 2015, distinto al año fiscal 2014, por lo que se aprecia una irregularidad. Así mismo para la renovación y prórroga de los contratos no se realizó con una anticipación no menor de 5 días hábiles previos al vencimiento del mismo, conforme lo señaló mediante comunicado SERVIR del año 2013 dichas omisiones constituyen un incumplimiento que generan responsabilidad administrativa por parte del Ex Director de Administración y Finanzas(...)."

#### DE LOS ANTECEDENTES:

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:

Que, según se tiene la Resolución Gerencial General Regional N° 002-2015-GRJ/GGR, de fecha 14 de enero de 2015, emitida por el Gerente General Regional del





Gobierno Regional de Junín, en su artículo segundo de la parte resolutive, indica: *"REMITASE copia de los actuados a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, para determinar las responsabilidades administrativas señaladas"*.

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

**El Informe Técnico N° 001-2015-GRJ/ORAF**, de la Directora Regional de Administración y Finanzas; informando al Director de Asesoría Jurídica, el Contrato administrativo en un régimen especial de contrato laboral para el sector público que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de una manera subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y obligaciones inherentes al régimen especial. No puede ser mayor al periodo que corresponda al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación en caso de prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal y debe formalizarse por un escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior... que el contrato de administrativo de servicios es de plazo determinado y su duración de servicios suscritos por el Gobierno Regional Junín con fecha 31 de diciembre de 2014, estas no se encuentran enmarcadas dentro de la normatividad vigente, al no cumplirse con los requisitos establecidos para las renovaciones correspondientes.

**El Informe Legal N° 016-2015-GRJ/ORAF**, del jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, comunicando al Gerente General del Gobierno Regional de Junín, que el art 4 numeral 4.1 y 4.2 del Decreto N° 065-2011-PCM, señala "El contrato administrativo de servicio es de plazo determinado". La duración del contrato no puede ser mayor del periodo que corresponde al año fiscal respectivo, dentro del cual se efectúa la contratación. Sin embargo el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considera la entidad contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder el año fiscal y debe formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior. Que el artículo 30 del Decreto Supremo N° 955 señala **"durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pagos posteriores a la finalización de la administración"**. Es así que estos contratos fueron suscritos durante el último año de gestión, en su ejecución originaran la afectación de gastos corrientes y finalmente implican compromisos de pago posteriores a la finalización de la administración, es decir los compromisos de pagos se tendrán que atender el año 2015, ejercicio final posterior a la conclusión de la administración que cesó el 31 de diciembre del 2014, por ello los actos administrativos son nulos de pleno derecho. Asimismo los referidos actos de renovación de contrato CAS, contraviene el numeral 27.1 de la Ley 28411 señala que los créditos presupuestarios tiene carácter limitado no se puede comprometer ni devengar gastos, por cuantía superior al monto de los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, siendo de nulos de pleno derecho los actos administrativos o de administración que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y administrativa que corresponde.

Que, los ciento noventa y cuatro contratos de renovación, **NO CUENTAN** con la certificación presupuestal que acredite que cada renovación este sustentada en la existencia de recursos financieros para pagar los servicios contratados, al margen que es administrativamente imposible que el 31 de diciembre del 2014, (fecha de suscripción de contrato) se puede obtener una certificación presupuestal para el año 2015.

Se puede apreciar que los ciento noventa y cuatro renovaciones de contrato contraviene lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 955 "Ley de descentralización Fiscal", que señala "durante el último año de gestión se prohíbe efectuar



cualquier tipo de gasto corriente que implique compromiso de pagos posteriores a la finalización de la administración, exceptuando de esta regla los casos de jubilación de los trabajadores que satisfagan los requisitos de ley". Por tanto el CPC. Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, ex Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín. Ha incumplido con la norma ya que el último año de gestión se prohíben efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pagos posteriores a la finalización de la administración.

#### TIPIFICACION DE LA FALTA:

Se debe tener en cuenta; que en materia sancionadora el **principio de legalidad** impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley. Como lo ha expresado el Tribunal Constitucional (Cfr. Expediente N.º 010-2002-AI/TC), este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (*lex scripta*), que la ley sea anterior al hecho sancionado (*lex praevia*), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (*lex certa*).

Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 300057 y su Reglamento.

Que sobre los hechos imputados al involucrado, constituiría faltas de carácter administrativo; que no es más ***"Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores"***; en el presente caso, se habría vulnerado el artículo 85, letra a), d), y q) - Ley 30057 - Ley de Servicio Civil, que prescribe:

<b>Artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil</b>	Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, y q) Las demás que señale la ley".
--	--

Norma que resulta concordante con lo establecido para el caso, en el acápite 98.3 del art. 98° del Reglamento de la Ley N°30057, aprobado por D.S. N° 040-2014-PC, que prescribe: 98.3. *La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo.*

De igual forma; lo establecido, en los incisos a) y d) del artículo 39°-Ley 30057, Ley de Servicio Civil, que prescribe: *"Son obligaciones de los servidores civiles, las siguientes: (...) a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público" y "d) Salvaguardar los intereses del Estado y emplearlo austeramente los recursos públicos".*

#### **Esto al haber transgredido.-**

Lo dispuesto en el artículo IV numeral 1.1 y 1.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, **"Principio de Legalidad.- las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"**. Es así, que es pertinente tener en consideración que en



el Estado Constitucional Democrático, el poder público, está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos, como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

El Artículo 7 del Decreto Legislativo 1057- Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, que señala: *"Los funcionarios o servidores públicos que efectúan contrataciones de personas que presten servicios no autónomos fuera de las reglas del presente régimen, incurren en falta administrativa y, en consecuencia, son responsables civiles por los daños y perjuicios que le originen al Estado"*.

El artículo 30°, del Decreto Legislativo N° 955, que ésta referido a la Descentralización Fiscal, que señala: *"Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pagos posteriores a la finalización de la administración"*. Es así, que estos han sido suscritos durante el último año de gestión, en su ejecución originarán la afectación de gastos corrientes y finalmente implican compromisos de pago corrientes a la finalización de la administración, es decir los compromisos de pago se tendrán que atender el año 2015, ejercicio fiscal posterior a la conclusión de la administración que cesó el 31 de Diciembre del 2014; por ello, las resoluciones en cuestión son nulos de pleno derecho.

El mandato expreso del numeral 27.1 del artículo 27° de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional del Sistema Nacional del Presupuesto", que mencionada: *"Los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo. No se pueden comprometer ni devengar gastos, por cuantía superior al monto de los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos o de administración que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y administrativa que correspondan"*. Congruentemente, en aplicación del artículo 5 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que señala: *"El contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponda al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal y debe formalizarse por escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior"*. Por lo tanto, se evidencia que no cuentan con la Certificación Presupuestaria que acredite que cada renovación esté sustentada en la existencia de recursos financieros para pagar los servicios contratados, al margen que es administrativamente imposible que al 31 de Diciembre del 2014 (fecha de suscripción de los contratos) se pueda obtener una Certificación Presupuestaria para un compromiso a atenderse el año 2015. Así mismo; el artículo 91° del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que señala: *"La responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de sus funciones o de la prestación de servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente"*.

El artículo 25 de T.U.O de la Ley 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que prescribe:





*“La ejecución presupuestaria, en adelante ejecución está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General citada, se inicia el 01 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal...”. Así mismo el numeral 26.2 del artículo 26 de la norma acotada, establece que: “las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de la administración los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las entidades que afecten gastos públicos deben supeditarse, de forma escrita, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales al titular y de la persona que autoriza el acto”. Del mismo modo, el Artículo 27 numeral 27.1 menciona “los créditos presupuestarios tiene carácter limitativo. No se puede comprometer ni devengar gastos por cuantía superior al monto de los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos o de administración que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y administrativa que correspondan”.*

El Artículo 77 numeral 77.1 del T.U.O, de ésta misma Ley; señala: *“Establécese que, cuando se trate de gastos de bienes y servicios así como de capital, realización de la etapa del compromiso, durante la ejecución de gasto público, es precedida por la emisión del documento que lo autorice. Dicho documento debe acompañar la certificación emitida por la oficina de presupuesto, o la que haga sus veces, sobre la existencia del crédito presupuestario suficiente, orientado a la atención del gasto en el año fiscal respectivo”.* El numeral 77.2 de la norma acotada, dispone que en el caso de gastos orientados a las contrataciones o nombramientos de personal se cuenta con las autorización legal, se debe certificar la existencia de la plaza correspondiente y el crédito presupuestario que garantice la responsabilidad de recursos, desde la fecha e ingreso del trabajador a la entidad hasta el 31 de diciembre del año fiscal respectivo. Numeral 77.4 de la norma acotada, cuando los gastos a que hace referencia el párrafo 77.2 comprometen años fiscales respectivos.

El Decreto Legislativo N° 955 “Ley de descentralización Fiscal”, en su artículo 30, que señala: *“Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromiso de pagos posteriores a la finalización de la administración, exceptuando de esta regla los casos de jubilación de los trabajadores que satisfagan los requisitos de ley”.*

El artículo 10°, numeral 1° de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General; que señala: *“Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La Contravención a la Constitución, la las leyes o a las normas reglamentarias”.* Estando a este extremo de la norma cabe mencionar que los referidos contratos atentan contra las leyes y normas reglamentarias señaladas en los considerandos que anteceden.

Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

#### **SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-**



Que, es pertinente considerar que el funcionario público es el ciudadano elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos de más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Ejerce representación de la voluntad del Estado en virtud de una especial delegación, transmitida en principio por Ley, y posteriormente por decisión administrativa contenida en una Resolución. Adopta decisión y puede en ciertos casos, estar facultado para resolver. Proyecta su actividad al exterior del esquema organizacional en virtud de representación.

En la Sentencia N.º 090-2004-AA/TC, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Que, estando a lo antes colegido, y teniendo en cuenta la Resolución Gerencial General Regional N° 002-2015-GRJ/GGR de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Junín; la falta disciplinaria imputable al **CPCC. Luís Alberto Salvatierra Rodríguez**, como Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Junín; sería por no actuar con la debida diligencia del caso y de acuerdo a sus funciones; por cuanto de los 194 renovaciones de Contratos Administrativos Disciplinarios de Servicios CAS, han sido efectuadas para el año fiscal 2015, distinto al año fiscal 2014, sin el debido proceso (opinión de las respectivas áreas usuarias, necesidad de servicio y sin presupuesto respectivo). En éste último caso se ha abusado del crédito presupuestario en compromisos que no le correspondía realizar, tampoco se ha cumplido con la certificación del gasto registrado en el SIAF; más aún, no han sido ingresados al registro de contratos administrativos, tampoco a la planilla electrónica en su debida oportunidad. Por lo tanto; se ha podido advertir, que dichos contratos no cuentan con la certificación presupuestal que acredite que cada renovación esté sustentada en la existencia de recursos financieros para pagar los servicios contratados, al margen que es administrativamente imposible que al 31 de diciembre de 2014 (fecha de suscripción de contrato) se pueda obtener una certificación presupuestal para el año 2015.

En consecuentemente, se puede apreciar que con éstos actos negligentes se ha ocasionado perjuicio económico a la entidad; que en estos casos, se ha producido la nulidad de actuados, que trajo como consecuencia la generación de mayores gastos generales para los Contratos Administrativos de Servicios – CAS; además de haberse agotado material humano, tiempo y servicio.

Que, estando a lo antes esgrimido; si bien es cierto, la falta disciplinaria que sería imputable a éste administrado, tendría sustento a la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Estado; sin embargo, al no existir la concurrencia de varias faltas, como antecedentes consentidas o ejecutoriadas de ser reincidentes en la comisión de faltas; una posible sanción puede servir para advertirle sobre la posibles consecuencias que puede acarrear la persistencia en su conducta infractora; consecuentemente, la posible sanción a imponérsele a éste involucrado sería **suspensión sin goce de remuneraciones**, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 87, e inciso b) del artículo 88°, ambos de la Ley N° 30057- Ley de Servicio Civil; y artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-



PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la del Procedimiento Administrativo General.

#### **ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE:**

Que, el Órgano Instructor Competente para disponer el Inicio del PAD; es el Gerente General Regional del GRJ.

#### **PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:**

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que el procesado presente sus descargos en el proceso se deberá brindarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles, ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

#### **DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:**

Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

**“Artículo 96.1.** Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

**Artículo 96.2.** Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

**Artículo 96.3.** Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

**Artículo 96.4.** En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.”;

Que, estando a lo recomendado por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y estando a lo dispuesto por esta Gerencia General Regional, y;

En uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el siguiente funcionario:



- ✓ CPCC. Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, en su condición de Director Regional de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Junín, por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento;** y **d) La negligencia en el desempeño de las funciones.**

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** el presente acto administrativo al funcionario comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándoles el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes.

MYQ

28 NOV 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL